

TJA/5ªSERA/JDN-009/2023

EXPEDIENTE: TJA/5ªSERA/JDN-009/2023

PARTE ACTORA: [REDACTED]

AUTORIDAD DEMANDADA:
DIRECTOR GENERAL DE
RESPONSABILIDADES DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE MORELOS Y OTRA.

MAGISTRADO: JOAQUÍN ROQUE
GONZÁLEZ CEREZO.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
ANA MARÍA ROMERO CAJIGAL.

Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre del dos mil veintitrés.

1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

Sentencia definitiva que emite el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en sesión del día veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, respecto de los autos del juicio administrativo número **TJA/5ªSERA/JDN-009/2023** promovido por [REDACTED] en el que se

declara procedente el presente juicio, por ende, se **declara la ilegalidad y nulidad lisa y llana** del emplazamiento efectuado a la actora en el procedimiento administrativo **31/2014**, dejándose sin efectos todas y cada una de las actuaciones posteriores a ese, incluida la resolución sancionatoria de fecha **veintitrés de marzo de dos mil quince**, así como todos y cada uno de los actos que se derivaron de ella; con base en los siguientes capítulos:

2. GLOSARIO

Parte actora: [REDACTED]

Autoridad demandada: **1.** Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos¹; y

2. Servidor Público Notificador en Funciones de Actuario, Adscrito a la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos².

¹ Anteriormente y al momento de la emisión de los actos impugnados Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

² Idem



Actos impugnados en la Demanda:

"A) La resolución definitiva dictada en el expediente 31/2014, mediante la cual se decretó como sanción la suspensión del cargo, así como auto que declara firme..."

B) La omisión de notificar personalmente a la suscrita la resolución definitiva recaída al expediente 31/2014..."

C) La orden de registro y el registro de la sanción consistente en la sanción de suspensión en contra de la suscrita [REDACTED] en el registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos..." (Sic)

Actos impugnados en la ampliación de la demanda

"A) El Acuerdo de Radicación de fecha 10 de junio de 2014, dictado en el expediente de responsabilidad administrativa 31/2014.

B) El Acuerdo de fecha 07 de enero de 2015, a través del cual la autoridad demandada determina la legalidad del supuesto emplazamiento realizado a la suscrita, declara la rebeldía de la suscrita y ordena que las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se realicen por medio de cédula de notificación personal que se fije en los estrados de la entonces Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas.

C) La resolución definitiva dictada en el expediente 31/2014.

D) Acuerdo de fecha 22 de mayo de 2015, por el que ordena materializar la sanción impuesta a la suscrita, dejar copia de la sanción en el expediente laboral o personal de la suscrita y el registro de la sanción en el libro de gobierno respectivo y en la base de datos digital."

A) La Razón de Notificación Personal de fecha 21 de noviembre de 2014.

B) La Razón de Citorio y Citorio, ambos de fecha 24 de noviembre de 2014.

C) La Razón de Emplazamiento y Cédula de Notificación Personal, ambas de fecha **25 de noviembre de 2014**.

D) La omisión de cumplir con el plazo establecido en el artículo 125 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación supletoria, para realizar las notificaciones, emplazamientos, citaciones y demás diligencias que se ordenen. (Sic)

LJUSTICIAADMVAEM: Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.³

LORGTJAEMO: Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos⁴.

CPROCIVILEM: Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos.

LSERVIDOREM Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos⁵.

³ Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5514.

⁴ Idem

⁵ Publicada el veinticuatro de octubre de dos mil siete, en el Periódico Oficial 4562, aplicable en términos de la disposición tercera transitoria del Decreto número dos mil ciento noventa y tres, por el que se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos.

3. ANTECEDENTES DEL CASO

1. Con fecha dieciséis de enero del de dos mil veintitrés, compareció la **parte actora**, por su propio derecho ante este **Tribunal** a promover Juicio de Nulidad; por acuerdo de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se le tuvo interponiendo su demanda en contra de los actos y de las **autoridades demandadas** precisadas en el glosario que antecede.

2. Con copias simples de la demanda y documentos que la acompañan, se ordenó emplazar a la **autoridad demandada**, para que en un plazo improrrogable de diez días produjera contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de ley.

3. Con acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por presentada a las **autoridades demandadas**, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, anunciando sus pruebas y con el apercibimiento de ley, se ordenó dar vista a la **parte actora** por el término de tres días para que manifestara lo que en su derecho conviniera; anunciándole su derecho para ampliar su demanda en el término de quince días hábiles.

4. En auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, se emitió acuerdo declarando perdido el derecho de la parte actora para desahogar la vista citada en el párrafo que antecede.

5. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se le tuvo a la demandante por admitida la ampliación de demanda en contra de las autoridades e impugnados indicados en el glosario de esta sentencia.

6. Previo emplazamiento, con acuerdo de fecha doce de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a las autoridades demandadas dando contestación a la ampliación de la demanda, con la cual se ordenó dar vista a la **parte actora** para que manifestara lo que a su derecho correspondía.

7. El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se acordó el desahogo de la vista por la demandante citada en el párrafo que precede.

8. En esa tesitura, por acuerdo de fecha veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se abrió el periodo probatorio de cinco días para ambas partes.

9. Mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, se les tuvo por perdido su derecho a las partes para ofrecer sus pruebas. Sin embargo, para mejor decisión del asunto se admitieron las pruebas que obraban en autos. Por último, se señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia de Ley.

9. Con fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de Ley, se hizo constar la incomparecencia de las partes y dado que las documentales ofrecidas por las mismas se desahogaban por su propia y especial naturaleza y, al no haber incidente pendiente de resolver, se turnó a la



etapa de alegatos, en la que solo la **parte actora** los aportó; se declaró cerrada la instrucción, ordenándose turnar los autos para emitir la sentencia conducente; la que se dicta al tenor de los siguientes capítulos:

4. COMPETENCIA

Este **Tribunal** es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; 1, 3 de la **LJUSTICIAADMVAEM**; 1, 18 inciso B) fracción II sub inciso a) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO**.

Como se advierte los actos impugnados hechos valer por la actora en la demanda como en su ampliación, derivan del procedimiento administrativo de responsabilidad llevado a cabo en el expediente **31/2014**, por autoridades administrativas, concluyendo con la resolución de **fecha veintitrés de marzo de dos mil quince**, en la cual la entonces Directora de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, determinó sancionar a la demandante con la **suspensión sin goce de sueldo en el empleo, cargo o comisión por un término de cuatro meses**.

5. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

La existencia de los actos impugnados se encuentra debidamente acreditados con la prueba consistente en:

La Documental: Consiste en los autos originales del procedimiento administrativo con número de expediente **31/2014**.

A la cual se le brinda pleno valor probatorio por tratarse de una documental original, en términos de lo dispuesto por el artículo 437 primer párrafo⁶ del **CPROCIVILEM**, con fundamento en el artículo 7⁷ de la **LJUSTICIAADMVAEM5**.

6. PROCEDENCIA

Las causales de improcedencia, por ser de orden público, deben analizarse preferentemente las aleguen o no las partes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 párrafo último de la **LJUSTICIAADMVAEM**, en relación con lo sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia de aplicación análoga y de observancia obligatoria para esta potestad en

⁶ **ARTICULO 437.-** Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar.

⁷ **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.



términos de lo dispuesto en los artículos 215 y 217 de la *Ley de Amparo*.

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.⁸

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la Ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.

En la demanda las **autoridades demandadas** manifestaron que configuraba la causal de improcedencia prevista por el artículo 37 fracción X **LJUSTICIAADMVAEM**, en relación con el artículo 77 de la **LJUSTICIAADMVAEM**⁹ vigente al momento de los hechos, que señalan a la letra:

⁸ Tipo de documento: Jurisprudencia, Novena época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Enero de 1999, Página: 13.

⁹ Publicada el 14 de enero de 1990, en el Periódico Oficial 3470 Sección Segunda y vigente al 03 de febrero de 2016.

Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

...
X. Actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro del término que al efecto señala esta Ley;

ARTICULO *77.-. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro del término de quince días contados a partir del día hábil siguiente en que le haya sido notificado al afectado el acto o resolución impugnados, o haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o se haya ostentado sabedor de los mismos cuando no exista notificación legalmente hecha.

Porque a su consideración la demanda es extemporánea al no haber sido presentada dentro del plazo de quince días, posteriores a la notificación por estrados de fecha catorce de abril de dos mil quince que se llevó a cabo de la resolución sancionatoria de fecha **veintitrés de marzo de dos mil quince.**

Sin embargo, dada la situación de los actos impugnados en la demanda como en la ampliación, así como las razones de impugnación; esta causal tiene ver con el fondo del asunto; por lo cual se desestiman sus manifestaciones, atendiendo a la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.¹⁰

Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjectables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.

¹⁰ Novena Época, Registro: 187973, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Página: 5.

En ese tenor, analizadas que fueron las causales de improcedencia, este Tribunal no advierte que se actualice alguna otra de la cual deba emitir pronunciamiento.

7. ESTUDIO DE FONDO

7. 1 El planteamiento del caso

Como quedó previamente reseñado, los actos impugnados de la demanda y ampliación fueron los siguientes:

"A) La resolución definitiva dictada en el expediente 31/2014, mediante la cual se decretó como sanción la suspensión del cargo, así como auto que declara firme..."

"B) La omisión de notificar personalmente a la suscrita la resolución definitiva recaída al expediente 31/2014..."

"C) La orden de registro y el registro de la sanción consistente en la sanción de suspensión en contra de la suscrita [REDACTED] [REDACTED] en el registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos..."

...

*"A) El Acuerdo de Radicación de fecha 10 de junio de 2014, dictado en el expediente de responsabilidad administrativa **31/2014**.*

*B) El Acuerdo de fecha **07 de enero de 2015**, a través del cual la autoridad demandada determina la legalidad del supuesto emplazamiento realizado a la suscrita, declara la rebeldía de la suscrita y ordena que las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se realicen por medio de cédula de notificación personal que se fije en los estrados de la entonces Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas.*

*C) La resolución definitiva dictada en el expediente **31/2014**.*

*D) Acuerdo de fecha **22 de mayo de 2015**, por el que ordena materializar la sanción impuesta a la suscrita, dejar copia de la sanción en el expediente laboral o personal de la suscrita y el registro de la sanción en el libro de gobierno respectivo y en la base de datos digital."*

...

A) La Razón de Notificación Personal de fecha 21 de noviembre de 2014.

B) La Razón de Citatorio y Citatorio, ambos de fecha 24 de noviembre de 2014.

C) La Razón de Emplazamiento y Cédula de Notificación Personal, ambas de fecha **25 de noviembre de 2014**.

D) La omisión de cumplir con el plazo establecido en el artículo 125 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación supletoria, para realizar las notificaciones, emplazamientos, citaciones y demás diligencias que se ordenen. (Sic)

En ese tenor, este órgano colegiado determinará la ilegalidad o legalidad de los actos controvertidos.

7.2 Presunción de legalidad

En la República Mexicana, así como en el estado de Morelos, los actos de autoridad gozan de presunción de legalidad, esto en términos del primer párrafo del artículo 16 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* del que se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello que expresamente les facultan las leyes, lo cual se apoya en el siguiente criterio:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.¹¹

Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad,

¹¹ Época: Décima Época. Registro: 2005766. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) Página: 2239.

cuando el primero señala, que la parte que afirme tendrá la carga de la prueba de sus respectivas proposiciones de hecho y los hechos sobre los que el adversario tenga una presunción legal.

7.3 Pruebas

Las partes no ofrecieron pruebas dentro de la temporalidad establecida para tal efecto; no obsta, en términos del artículo 53 de la **LJUSTICIAADMVAEM**, para mejor decisión del asunto fue admitida la documental exhibida en el proceso y que ya fue debidamente valorada consistente en:

La Documental: Consiste en los autos originales del procedimiento administrativo con número de expediente **31/2014**.

7.4 Razones de impugnación de mayor beneficio

Las razones de impugnación esgrimidas por la demandante se encuentran visibles en el escrito inicial de demanda y ampliación.

Dado el análisis en su conjunto de lo expresado por la **parte actora** en las razones por las que se impugna los actos que demanda, este Tribunal en Pleno se constriñe a analizar las razones de impugnación que le traiga mayores beneficios.

dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.



"2023, Año de Francisco Villa"
El revolucionario del pueblo.

como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base **de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional.** Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito.

(El énfasis en propio)

Por lo anterior, la carga de la prueba corresponde a la actora. Esto vinculado con el artículo 386 primer párrafo¹² del **CPROCIVILEM** de aplicación complementaria a la **LJUSTICIAADMVAEM** de conformidad a su artículo 7¹³,

¹² **ARTICULO 386.-** Carga de la prueba. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Así, la parte que afirme tendrá la carga de la prueba, de sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal.

¹³ **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo



A lo anterior sirve de apoyo por analogía el siguiente criterio jurisprudencial:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.¹⁴

De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.

Para tal efecto, los actos impugnados que se analizarán serán los narrados en la ampliación de la demanda consistentes en:

"B) La Razón de Citatorio y Citatorio, ambos de fecha 24 de noviembre de 2014.

¹⁴ No. Registro: 179.367, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Febrero de 2005, Tesis: P./J. 3/2005, Página: 5. Contradicción de tesis 37/2003-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy siete de febrero en curso, aprobó, con el número 3/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil cinco.

C) La Razón de emplazamiento y Cédula de Notificación Personal, ambas de fecha 25 de noviembre de 2014.

Esto es así, porque de resultar nulos quedaría sin efectos el emplazamiento realizado y no tendría caso analizar las demás razones de impugnación tendientes a combatir la resolución de fecha **veintitrés de marzo de dos mil quince** que la actora hace valer. De lo contrario sus agravios resultarían extemporáneos.

Ahora, bien como se aprecia de las manifestaciones que la demandante fórmula para atacar el emplazamiento a juicio en el procedimiento administrativo **31/2014**, narra¹⁵:

El notificador no establece de manera adecuada circunstancias de tiempo, lugar y modo en que supuestamente transcurrió las diligencias del 21 y 24 de noviembre de 2014. En concreto, solamente hace constar que inició la diligencia el 21 de noviembre de 2014 a las **dieciséis horas con veintidós minutos, pero no hace constar la hora en la que concluyó la diligencia**, por lo que no se puede tener idea de los momentos en que realizó los recorridos que menciona, lo que permitiría saber si son congruentes y creíbles...

Además de ello, cabe hacer notar que de la narrativa realizada por el notificador en ningún momento señala que la supuesta [REDACTED] o el domicilio que supuestamente era el de la suscrita, tuvieran algún tipo de nomenclatura que le permitiera tener la certeza de que efectivamente se había constituido en el domicilio indicado en autos. En consecuencia, es imposible tener certeza de que el notificador se constituyera en el domicilio indicado en autos, ni mucho menos que allí viviera la suscrita, ya que en ningún momento tuvo a su vista la nomenclatura que así le permitiera corroborarlo ni lo constató con impresiones fotográficas. Por el contrario, únicamente hace constar el supuesto dicho de una vecina, pero debido al cúmulo de irregularidades de que se encuentra plagada la diligencia de 24 de noviembre de 2014, no es posible concederle el valor probatorio que pretenden las demandadas, máxime que no se encuentran corroboradas por ningún otro medio de prueba.

¹⁵ Fojas 67 reverso y 68 del presente asunto.



4. ...

En segundo lugar, la Razón de Citatorio y el Citatorio que se comentan, carecen de cualquier efecto probatorio y certeza jurídica, por lo que se expresa a continuación. La Razón de Citatorio hace constar que el notificador supuestamente se constituyó en [REDACTED] en busca del domicilio ubicado en [REDACTED] el 24 de noviembre de 2014, a las **SIETE HORAS CON DOS MINUTOS**. Asimismo, señala que la puerta de acceso se encontraba abierta, que había una persona de espaldas y que al llamar a esa persona, dijo ser [REDACTED] pero cuando le comentó que su cometido era emplazarla de dos procedimientos y se identificó como servidor público notificador en funciones de actuario dicha persona se metió abruptamente a la casa; que posteriormente volvió a tocar, salió otra personas, volvió a identificarse y que entendió la diligencia de citatorio con la otra persona, de dicha persona no quiso identificarse, pero si recibió documentos aunque no quiso firmar, por lo que dejó dos citatorios con dicha persona.

De igual forma, hace constar el notificador que entregó el citatorio el 24 de noviembre de 2014, a las **SIETE HORAS CON DOS MINUTOS**.

...

De lo expuesto se advierte que la Razón de Citatorio y el Citatorio se contradicen gravemente y son totalmente **INVEROSIMILES** y carentes de toda lógica, toda vez que hacen constar que, supuestamente, el notificador, **SE CONSTITUYÓ EN EL DOMICILIO, ENTREGÓ EL CITATORIO, EXACTAMENTE A LA MISMA HORA (SIETE HORAS CON DOS MINUTOS)** ...

...

En segundo lugar, es de observar que la Razón de Notificación hace constar que el notificador supuestamente se constituyó en el domicilio ubicado en [REDACTED] el 25 de noviembre de 2014, a las **VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS**. Asimismo, señala que tocó varias veces en la puerta de acceso y esperó un lapso de aproximadamente **DIEZ MINUTOS** y al no obtener respuesta, procedió a fijar Cédula de Emplazamiento en la puerta de acceso al domicilio.

De igual forma, hace constar el notificador que fijó la cédula de notificación en la puerta de acceso al domicilio el 25 de noviembre de 2014, a las **VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS**.

Es decir, según su propia narrativa, el servidor público notificador en funciones de actuario, llegó al domicilio a las **VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS**, tocó varias veces, posteriormente esperó **DIEZ MINUTOS**, por lo que de manera posterior y al no obtener respuesta alguna, fijó Cédula de Notificación Personal a las **VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS**.

De lo expuesto se advierte que la Razón de Notificación y la Cédula de Notificación se contradicen gravemente y son totalmente **INVEROSIMILES** y carentes de toda lógica, toda vez que hacen

"2023, Año de Francisco Villa"
El revolucionario del pueblo.

constar que, supuestamente, el notificador SE CONSTITUYÓ EN EL DOMICILIO Y FIJÓ LA CÉDULA EN LA PUERTA DE ACCESO EL DOMICILIO, EXACTAMENTE A LA MISMA HORA (VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS). Sin embargo, **ES IMPOSIBLE QUE HUBIERA TOCADO Y ESPERADO DIEZ MINUTOS MÁS y que todavía fueran las veinte horas con treinta minutos.** En tal caso, lo lógico y coherente habría sido que la concluyera la diligencia fijando la Cédula de Notificación Personal a las VEINTE HORAS CON CUARENTA MINUTOS cuando menos, Y NO EXACTAMENTE A LA MISMA HORA QUE INICIÓ LA DILIGENCIA.

”

Son **fundadas** las razones vertidas, porque como se puede constatar en la diligencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el servidor público notificador en funciones de actuario de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, en la diligencia con nombre “RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL”, señala que se constituyó física y legalmente a las dieciséis horas con veintidós minutos en las afueras del sector de la policía; sin que señale al final de la constancia la hora en que término esa diligencia; obstaculizando poder saber si el tiempo que tardó es proporcional con todas las acciones que asegura llevó a cabo con el fin de ubicar el domicilio que debía localizar.

Misma situación acontece en la constancia denominada “RAZÓN DE CITATORIO”¹⁶ ya señala que se constituyó física y legalmente en el domicilio ubicado en la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las siete horas con dos minutos; sin que indique al final de la constancia la hora en

¹⁶ Fojas 188 del expediente de procedimiento administrativo 31/2014

mismo fue entregado a las siete horas con dos minutos; lo que resulta a todas luces imposible que en un solo momento iniciara una diligencia y entregara el citatorio, cuando de la lectura de sus razonamientos se advierte que se constituyó y se entrevistó con dos personas; en tanto que la entrega del referido citatorio aparentemente fue entregado al final de la diligencia.

Asimismo tal y como la justiciable hace notar, en la documentales con título “Cédula de Notificación Personal” y “Razón de Notificación”, ambas de fechas veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el servidor público notificador en funciones de actuario de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, hizo constar que se emplazaba a la **parte actora** y procedía a fijar la cédula de notificación personal con la transcripción del acuerdo de radicación, así como las copias de traslado debidamente autorizadas, tomando fotos para agregarlas a su razonamiento; sin embargo de las imágenes que se acompañaron, no se visualiza con exactitud estén fijadas las cédulas de notificación del expediente **31/2014**, menos aún las copias de traslado, que dicho sea de paso, por lo menos debieron constar de ciento ochenta y dos fojas útiles, tomando en cuenta hasta antes del auto de radicación de fecha **diez de junio de dos mil doce**, del procedimiento precitado.

En abundancia de lo anterior, resulta cierto lo que invoca la actora como hecho notorio, que los siguientes expedientes se encuentran instruidos en su contra con estos datos:



EXPEDIENTE TEJA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE RAZÓN DE CITATORIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL	HORA
TJA/5ª.SERA/JDN-006/2023	18/2014	24/NOV/2014	25/NOV/2014	20.30
TJA/5ª.SERA/JDN-007/2023	16/2014	24/NOV/2014	25/NOV/2014	20:35
TJA/5ª.SERA/JDN-008/2023	33/2014	24/NOV/2014	25/NOV/2014	20:35
TJA/5ª.SERA/JDN-009/2023	31/2014	24/NOV/2014	25/NOV/2014	20.30

De la anterior información, se advierte que todos esos asuntos fueron notificados el mismo día veinticinco de noviembre de dos mil catorce; asimismo en esos expedientes obran fotografías, donde solo se visualizan cuatro documentos fijados con cinta adherente; lo que viene a confirmar que no se observa que se le hayan dejado a la actora las copias de traslado del expediente **31/2014**, como lo refirió el servidor público notificador en funciones de actuario de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría en la razón de notificación personal respectiva.

En las narradas consideraciones y enlazándolas entre sí, se concluye que las actuaciones en comento no son eficaces para tener la certeza jurídica de que la actora fue debidamente emplazada al procedimiento administrativo **31/2014**.

Tal y como lo sostiene la jurisprudencia con rubro:

EMPLAZAMIENTO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA EXAMINAR DE OFICIO LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS, AUN RESPECTO DE CUESTIONES NO ADUCIDAS EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE

ACTUACIONES Y, EN SU CASO, EN EL RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO CONTRA LO RESUELTO EN ÉSTE.¹⁷

Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el emplazamiento al juicio es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor relevancia para garantizar el derecho de audiencia al demandado, pues de ese acto procesal depende que éste pueda contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas y alegar en el juicio. En suma, tiene como propósito que el demandado tenga adecuada defensa, de modo que se ha considerado un acto procesal de orden público. Por las mismas razones, se ha estimado que la falta o la ilegalidad del emplazamiento se erige como la violación procesal de carácter más grave en el proceso, y que actualiza una violación evidente de la ley que deja sin defensa al enjuiciado; por tanto en el presente caso, la accionante no tuvo la oportunidad de acudir al procedimiento administrativo que en forma de juicio se llevó en su contra, violándose su garantía de audiencia y seguridad jurídica; lo que da como resultado que tampoco hayan tenido conocimiento de la resolución definitiva de fecha **veintitrés de marzo de dos mil quince**, por medio de la cual se le sancionó, al serle notificada por estrados de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría en fecha **catorce de abril de dos mil quince**¹⁸; sino hasta que la autoridad demandada dio contestación a la demanda en esta vía administrativa.

¹⁷ Registro digital: 2019780; Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común; Tesis: 1a./J. 13/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 951, Tipo: Jurisprudencia.

¹⁸ Foja 668 del expediente de procedimiento administrativo 31/2014

Por ende, al ser suficientemente fundadas las razones vertidas por la **parte actora** analizadas, **trae como consecuencia declarar la nulidad lisa y llana** de la resolución sancionatoria de fecha **veintitrés de marzo de dos mil quince** dictada en el expediente **31/2014**, así como todos y cada uno de los actos que se derivaron de ella, con motivo de las ilegales diligencias de emplazamiento llevadas a cabo el veintiuno, veinticuatro y veinticinco de noviembre de dos mil catorce; encuadrando en lo previsto en las fracciones II y IV del artículo 4, de la **LJUSTICIAADMVAEM** que dispone literalmente:

ARTÍCULO 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

...

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso;

...

En aval de lo asentado, es de plasmar el siguiente criterio en materia administrativa, cuyo rubro y texto es el siguiente:

NULIDAD. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL¹⁹.

Los artículos 80 a 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no prevén textualmente las figuras jurídicas de "**nulidad lisa y llana**" o "nulidad para efectos", limitándose a precisar que dicho tribunal podrá decretar la nulidad de los actos impugnados, y que sus sentencias habrán de ejecutarse en

¹⁹**Registro digital:** 176913, **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito, **Novena Época, Materia(s):** Administrativa, **Tesis:** I.7o.A. J/31, **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2212, **Tipo:** Jurisprudencia.

los términos que dispongan éstas. A efecto de determinar si la nulidad decretada por las Salas de dicho órgano contencioso administrativo debe ser lisa y llana, o en su defecto, para efectos, deberá estarse a los criterios jurisprudenciales en la materia, así como a los principios que rigen el derecho administrativo. **Se decretará la nulidad lisa y llana cuando el acto impugnado adolezca de vicios ostensibles y particularmente graves, que bajo ninguna forma pueden ser convalidados;** el resultado jurídico de este tipo de nulidad implica la existencia de cosa juzgada, por lo que la autoridad demandada no podrá emitir una nueva resolución en el mismo sentido; por ejemplo, la incompetencia del servidor público que emitió el acto impugnado, y por regla general, en los asuntos en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal estudie el fondo del asunto, determinando que la conducta del particular está justificada por alguna norma de carácter general, o que los hechos que generaron el acto administrativo o fiscal no encuadran en el supuesto normativo invocado por la demandada. Por otra parte, la nulidad para efectos procede en los casos en que el acto impugnado contenga vicios subsanables, o que los mismos se encuentren en el procedimiento que le dio origen, lo que doctrinalmente se conoce como vicios de nulidad relativa; la consecuencia jurídica de dicha determinación obliga a la autoridad a subsanar tales ilicitudes, ya sea reponiendo el procedimiento o dictando una nueva determinación; de manera ejemplificativa, y no restrictiva, se pueden citar defectos u omisiones en el llamamiento al procedimiento administrativo (emplazamiento); no brindar oportunidad de probar y alegar; indebida fundamentación y motivación; y el no constreñimiento de la resolución a la cuestión debatida, que se forma con la pretensión del Estado y las defensas del particular, como sería la falta o indebida valoración de pruebas.

(El énfasis es propio)

Destacando que, con lo anterior se da atención a la pretensiones de la actora consistentes en:

“A) La resolución definitiva dictada en el expediente 31/2014, mediante la cual se decretó como sanción la suspensión del cargo, así como auto que declara firme...”

“B) La omisión de notificar personalmente a la suscrita la resolución definitiva recaída al expediente 31/2014...”

“C) La orden de registro y el registro de la sanción consistente en la sanción de suspensión en contra de la suscrita [REDACTED] [REDACTED] en el registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos...”

...

“A) El Acuerdo de Radicación de fecha 10 de junio de 2014, dictado en el expediente de responsabilidad administrativa 31/2014.

B) El Acuerdo de fecha 07 de enero de 2015, a través del cual la autoridad demandada determina la legalidad del supuesto emplazamiento realizado a la suscrita, declara la rebeldía de la suscrita

y ordena que las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se realicen por medio de cédula de notificación personal que se fije en los estrados de la entonces Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas.

C) La resolución definitiva dictada en el expediente 31/2014.

D) Acuerdo de fecha **22 de mayo de 2015**, por el que ordena materializar la sanción impuesta a la suscrita, dejar copia de la sanción en el expediente laboral o personal de la suscrita y el registro de la sanción en el libro de gobierno respectivo y en la base de datos digital."

...

A) La Razón de Notificación Personal de fecha 21 de noviembre de 2014.

B) La Razón de Citorio y Citorio, ambos de fecha 24 de noviembre de 2014.

C) La Razón de Emplazamiento y Cédula de Notificación Personal, ambas de fecha 25 de noviembre de 2014.

D) La omisión de cumplir con el plazo establecido en el artículo 125 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación supletoria, para realizar las notificaciones, emplazamientos, citaciones y demás diligencias que se ordenen. (Sic)

8. EFECTOS DEL FALLO

8.1. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución sancionatoria de fecha **veintitrés de marzo de dos mil quince** dictada en el expediente **31/2014**, así como todos y cada uno de los actos que se derivaron de ella, con motivo de las ilegales diligencias de emplazamiento llevadas a cabo el veintiuno, veinticuatro y veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

8.2. A consecuencia de lo señalado en el punto que antecede, las **autoridades demandadas**, deberán realizar todas las acciones, que dejen sin efectos los actos que realizaron para dar cumplimiento a los puntos resolutivos **SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO** de la resolución

de **veintitrés de marzo de dos mil quince**, dictada en el expediente de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número **31/2014** y así acreditarlo ante la Sala del conocimiento.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto en los artículos 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; los artículos 1, 18 inciso B fracción II, sub inciso a) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO** 1, 3, 85 y 86 de la **LJUSTICIAADMVAEM**, es de resolverse y se:

9. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en capítulo cuatro de la presente resolución.

SEGUNDO. Son fundados los argumentos hechos valer por la actora [REDACTED] [REDACTED] contra actos de las autoridades demandadas en términos de las aseveraciones vertidas en la presente; consecuentemente se declara la nulidad lisa y llana de la resolución sancionatoria de fecha **veintitrés de marzo de dos mil quince** dictada en el expediente **31/2014**, así como todos y cada uno de los actos que se derivaron de ella, con motivo de las ilegales diligencias de emplazamiento llevadas a cabo el veintiuno, veinticuatro y veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

TERCERO. Las autoridades demandadas, deberán realizar todas las acciones, que dejen sin efectos los actos que



realizaron para dar cumplimiento a los puntos resolutivos **SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO** de la resolución de **veintitrés de marzo de dos mil quince**, dictada en el expediente de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número **31/2014** y así acreditarlo ante la Sala del conocimiento.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

10. NOTIFICACIONES

Notifíquese a las partes como legalmente corresponda

11. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado **GUILLERMO ARROYO CRUZ**, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; **MARIO GÓMEZ LÓPEZ**, Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado **Doctor en Derecho JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS**, Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Magistrado **MANUEL GARCÍA QUINTANAR**, Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, y Magistrado **JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CERESO**, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Ponente en el presente

asunto, en términos de la Disposición Transitoria Cuarta del decreto número 3448 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos* y de la *Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5629 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; ante **ANABEL SALGADO CAPISTRÁN**, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.**

MAGISTRADO PRESIDENTE

GUILLERMO ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN

MARIO GÓMEZ LÓPEZ

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA HABILITADO EN
FUNCIONES DE MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA DE
INSTRUCCIÓN



TJA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

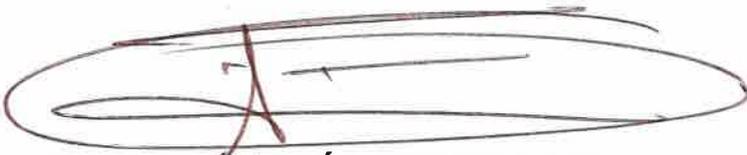
TJA/5ªSERA/JDN-009/2023


MAGISTRADO

DOCTOR EN DERECHO JORGE ALBERTO ESTRADA
CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO



MANUEL GARCÍA QUINTANAR

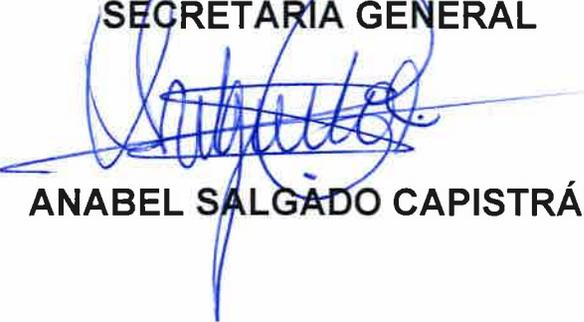
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

MAGISTRADO


JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO

TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SECRETARIA GENERAL


ANABEL SALGADO CAPISTRÁN

"2023, Año de Francisco Villa"
El revolucionario del pueblo.

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: que estas firmas corresponden a la resolución emitida por este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente número TJA/5ªSERA/JDN-009/2023, promovido por [REDACTED] contra actos del **DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS Y OTRA**, misma que es aprobada en Sesión de Pleno de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintitrés. **CONSTE**



AMRC

"En términos de lo previsto en los artículos 6 fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracción XXI, 68 fracción VI, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 3 fracciones XXV y XXVII, 49 fracción VI, 84, 87, y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".

